

## LA “BATALLA DE QUITO”<sup>1</sup>

Ernesto Vivares

14 de noviembre de 2019

Para Albert Camus, una ciudad se conoce por cómo se nace, se vive y se muere en ella. De acuerdo con esta idea, la “Batalla de Quito”<sup>2</sup> va a dejar el recuerdo de una vivencia de dolor y resentimiento que se opone a la imagen cosmopolita, sensible, turística y ecológica de una ciudad y un país sin sobresaltos ni conflictos. Tras la quita de los subsidios a los combustibles acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en solo una semana, e inesperadamente para muchos, el país fue testigo de un enfrentamiento entre, por un lado, las comunidades indígenas, los estudiantes y distintos segmentos de las clases urbanas y, por el otro, las fuerzas de seguridad, los policías y los militares, que desató una espiral de represión estatal y levantamiento social rural-urbano. Según la interpretación gubernamental, en palabras de la ministra de Seguridad, María Paula

Romo, el conflicto supuso “un intento de golpe desde fuerzas violentas”, y lo que se hizo fue “contener el derrocamiento de un gobierno” (*El Comercio*, 2019). Desde otros puntos de vista, en cambio, la protesta y el conflicto fueron el resultado del “paquetazo” del gobierno, relacionado con el crédito del FMI destinado a reducir el déficit fiscal, incrementar la competitividad del país y generar empleo con medidas neoliberales de ajuste (FMI, 2019).

En todo caso, tras 11 días de protestas, la “Batalla de Quito” devino en un conflicto nacional con ribetes regionales, caracterizado por la errónea gestión del gobierno, el exceso de la represión policial y militar, y la visualización y profundización de una grieta étnico-clasista marcada por distintos intereses y configuraciones regionales. Una fractura económico-política que visibiliza la profundidad de la desigualdad que subyace en la base del conflicto y que está presente en Ecuador desde hace décadas, como en otras muchas partes de América Latina. Queda la pregunta académica de si la “Batalla de Quito” es fruto de la inequidad o de

---

<sup>1</sup> Agradezco a los profesores Fredy Rivera, Raúl Salgado y Franklin Ramírez, de FLACSO Ecuador, y a Sebastián Nader y otros colegas de dentro y fuera de Ecuador, sus observaciones y comentarios al borrador de este artículo.

<sup>2</sup> Esta expresión se extrae de las radios y redes sociales. Se trata de un concepto controvertido debido a sus diversas y opuestas interpretaciones.

la lucha en torno a distintos órdenes históricos de desarrollo. El espíritu de Braudel (1977) gira en torno a ella.

Este texto ofrece un análisis de la “Batalla de Quito” desde la perspectiva de la Economía Política Global (EPG), y desarrolla una lectura integral y crítica de lo sucedido (Cohen, 2019). El objetivo no es desestimar las reflexiones políticas, sino incorporar razonamientos de naturaleza económica e internacional con el fin de comprender el fenómeno de una forma más acabada. Desde la EPG, la “Batalla de Quito” es un conflicto vinculado al modelo de desarrollo ecuatoriano, en el que se articulan distintas configuraciones económico-políticas, sus particulares jerarquías sociales y su inserción económica en el orden internacional.

La primera sección del artículo presenta una cronología de los principales sucesos y acciones gubernamentales en el transcurso de la protesta. En la segunda, se interpreta el conflicto según los enfoques de agencia y de estructura. En la última sección se sintetizan algunas líneas explicativas, útiles no solo para comprender la “Batalla de Quito”, sino también aplicables para interpretar otros fenómenos de la región en clave de EPG.

### **Cronología**

Antes de iniciar el análisis, es preciso recordar el desarrollo de los aconte-

cimientos que llevaron a la “Batalla de Quito”. En este sentido, la información periodística ofrece suficientes datos para ensamblar esta cronología como sigue:

11 marzo de 2019: El FMI informa públicamente que ha aprobado un acuerdo financiero de 4.200 millones de dólares de deuda para apoyar las reformas económicas del gobierno de Ecuador.

21 de marzo: El gobierno notifica que el acuerdo se centrará en la reducción del déficit fiscal, la reforma del código laboral y el incremento de los impuestos.

1 de octubre: Casi siete meses después, el presidente Lenín Moreno anuncia la reducción de los subsidios al combustible y el retiro de Ecuador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

2 y 3 de octubre: El 2 de octubre, las organizaciones de transportistas declaran un paro general y distintas organizaciones indígenas comienzan a marchar hacia Quito, mientras se inician los disturbios. El 3 de octubre se desata la violencia en Quito, con enfrentamientos entre manifestantes, principalmente estudiantes y policías. El gobierno declara el estado de excepción.

4 de octubre: Los transportistas levantan el paro y el gobierno acepta subir las tarifas del transporte público. Sin embargo, el aumento del precio del combustible pasa de los transportistas a los usuarios. La negociación no descomprime el conflicto, sino que lo potencia. Llegan parte de los grupos indígenas y, junto con los estudiantes y jóvenes, se enfrentan a la policía.

5 y 6 de octubre: El día 5 las comunidades indígenas, los jóvenes y los sindicatos mantienen las protestas y estas se extienden a las provincias, junto con el bloqueo de carrete-

ras. Al día siguiente, el transporte público funciona irregularmente a nivel nacional.

7 de octubre: El presidente Moreno, por sugerencia del alto mando militar, traslada la sede del gobierno a Guayaquil, y denuncia públicamente la inminencia de un golpe de Estado orquestado, entre otras personas, por el expresidente Rafael Correa y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El día 8 los manifestantes irrumpen en la Asamblea Nacional y en la sede del poder judicial. El presidente declara el toque de queda.

9 de octubre: El presidente vuelve a Quito y anuncia que se reunirá con los líderes indígenas. Distintas ONG denuncian los excesos cometidos en la represión de las manifestaciones. La ministra del Interior pide disculpas por el uso de gases lacrimógenos en los centros humanitarios de las universidades.

10 de octubre: La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) promete continuar con las protestas ante las cifras de los altercados. Estas registran 5 muertos, 554 heridos y más de 1.000 detenidos, además de 133 policías heridos, y 100 militares y 30 policías detenidos en las comunidades de Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Calderón y el norte de Quito.

11 y 12 de octubre: El 11 se produce un repunte de la violencia entre indígenas, y policías y militares. La CONAIE solicita la renuncia de la ministra del Interior y del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, por el uso excesivo de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos. El 12 de octubre el presidente Moreno militariza Quito. La CONAIE acepta dialogar con el presidente solo si se deroga el Decreto 883, que reduce los subsidios a los combustibles. Cierran los centros comerciales y se aprecia el desabasto de alimentos en Quito.

13 y 14 de octubre: La Defensoría del Pueblo, que monitorea el respeto a los derechos humanos, declara que las protestas acumulan

un balance de 7 muertos, más de 1.300 heridos y 1.200 detenidos, y cerca de 100 desaparecidos, especialmente en Quito. La CONAIE y el gobierno abren una mesa de diálogo con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas en Ecuador y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Ambos acuerdan la derogación del Decreto 883 y la CONAIE levanta el paro. El Decreto se deroga el 14 de octubre. El gobierno se compromete públicamente ante los medios de comunicación a consensuar una política focalizada y sectorializada de subsidios a los combustibles. Lo que parece ser una victoria, con el tiempo lucirá más como un triunfo a lo Plinio, visibilizando un conflicto económico político que subyace en Ecuador desde hace décadas.

### **Economía Política Global**

La EPG abarca el estudio de los conflictos y del desarrollo como dos dimensiones inseparables, a partir de la investigación de las relaciones entre lo económico y lo político, y entre lo nacional y lo internacional, analizando quién gana, quién pierde, cómo y por qué (Strange, 1976: 339). La premisa central es que el conflicto y el desarrollo son dos dimensiones de un orden histórico, y que cada Estado está sujeto a su configuración económico-política, y a su inserción en el marco internacional (Berry, 2020). Para la EPG, las conclusiones de los análisis no son universales, sino relativas, debido a que pueden variar en función de las épocas y de los espacios geográficos; eso hace que la EPG sea más una línea de investigación que una disciplina académica (Gilpin, 1989; Cohen, 2019; Ravenhill, 2017).

Así, el estudio de un conflicto o de cómo una protesta desemboca en una batalla, puede realizarse a partir de los tres criterios centrales de la EPG. El primero es la relación entre agencia y estructura; el segundo, la relación entre lo económico y lo político, y el tercero, la relación entre lo nacional y lo internacional. La agencia es el examen de la conducta de los actores, sus motivaciones, intereses y objetivos. La estructura es la investigación de las configuraciones socio-económicas y políticas que se presentan en un momento y en un lugar concreto. El criterio de lo nacional/internacional se refiere al ordenamiento económico-político que acompaña a una inserción internacional determinada.

En la “Batalla de Quito” la gestión del gobierno convirtió una protesta en un conflicto social al recurrir a las Fuerzas Armadas, una fuerza de coerción cuya misión es la defensa nacional externa, no la protesta social interna. Así, se partidizó a un actor que, al contrario que otras Fuerzas Armadas de la región, se ceñía a garantizar el orden democrático. El error en la evaluación de riesgos hizo que las fuerzas de seguridad terminaran operando como otro grupo manifestante más, al combatir en la calle a favor del gobierno, pero sin directivas para restablecer el orden y la paz, y contener el conflicto. El uso de la fuerza militar contra la protesta social fue tan inútil y desgraciado como servirse de fuerzas especiales para

cuidar un jardín de infantes. Sumado a ello, el conflicto se agudizó por la inexistencia de canales institucionales de mediación política, dado que los partidos y la Asamblea se evaporaron. Por lo demás, y a pesar de su victoria mediática, el juego político ha acabado vinculando a las comunidades indígenas con los ajustes del gobierno, legitimando las orientaciones definidas por el FMI.

Analistas y expertos han señalado que, pese a la influencia de los ajustes neoliberales requeridos tras los préstamos por valor de más de 10.200 millones de dólares (*El País*, 2019), en la “Batalla de Quito” la agencia del gobierno determinó el curso de los acontecimientos. Su actuación estuvo marcada por las fallas de la inteligencia y el uso de tácticas militares que generaron un efecto contrario al esperado, tal y como de hecho reconoció la ministra del Interior (*El Comercio*, 2019). Estas equivocaciones exacerbaban las grietas étnico-clasistas, y las brechas entre la ciudad y el campo, entre Guayaquil y Quito, y entre las élites económico-políticas y el sector agrícola y alimentario. Las causas profundas del conflicto llevaban décadas soterradas, invisibles pero latentes, dado que el gobierno, según afirman los especialistas, nunca ha hablado ni entendido el quechua.

Ahora bien, el gobierno acumuló un conjunto de errores —eludir el impacto social de los ajustes, desaten-

der a las comunidades indígenas, trasladarse a Guayaquil, o sugerir que Rafael Correa, Ricardo Patiño, Virgilio Hernández, Paola Pabón o Nicolás Maduro estaban detrás del conflicto (*El Universo*, 2019)—, entre los cuales el más grave fue involucrar a las fuerzas militares en la política interna. Es más, al militarizar el conflicto, el gobierno de Moreno quebró más de tres décadas de buena relación entre la sociedad ecuatoriana y sus Fuerzas Armadas. Y, actualmente, mantener en su puesto al ministro de Defensa —un exmilitar conservador, bien visto por Washington— está generando más problemas que soluciones.

Del lado de los manifestantes, también hubo desaciertos. La CONAIE focalizó sus protestas en la derogación del Decreto 883, pero este no es más que una medida dentro del plan de desarrollo que el gobierno acordó con el FMI, cuya esencia no ha sido alterada. El ajuste, en marcha desde hace tiempo, implica una reestructuración del gasto público orientada a mejorar la competitividad y recuperar el crecimiento, y no está en discusión. El acuerdo con el FMI establece claramente que hay que “monetizar activos que permanecerán bajo propiedad pública, pero cuyos derechos de concesión serán otorgados a socios privados” (FMI, 2019). De hecho, el gobierno ecuatoriano ya está trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con CAF-Banco de Desarrollo para pri-

vatizar el Banco del Pacífico, la Corporación Nacional de Comunicaciones (CNT), la Empresa Pública Cementera de Ecuador (EPCE) y otras empresas públicas. Asimismo, las protestas que lideraron las comunidades indígenas, a menudo desorganizadas, no previeron que el conflicto escalase a los niveles de violencia registrados, y sus reivindicaciones fueron más defensivas que proactivas.

Con todo, cabe recordar que no es la primera vez que los movimientos indígenas se enfrentan al Estado nacional. Desde 1990, cuando se cuestionó el formato centralista y supuestamente unitario de la identidad ecuatoriana (Rivera Vélez, 1994), han protagonizado varios episodios de alcance estratégico que hicieron recular a los gobiernos de turno. En 1995 frenaron los intentos de liberalización de las tierras comunales y la privatización de servicios públicos, bajo el gobierno conservador de Sixto Durán-Ballén. En 2000, junto con militares inconformes, lograron deponer al presidente Jamil Mahuad que había colapsado la economía nacional y sometió al país a un régimen de dolarización que perdura hasta el presente. El cúmulo de estas experiencias, sumado a su capacidad política, ha convertido a las comunidades indígenas de Ecuador en el principal movimiento de estas características en América Latina.

Por su parte, diversos grupos sociales al margen del conflicto empezaron a verse afectados cuando, a partir del 11 de octubre, las grandes cadenas de supermercados se vieron desabastecidas y los comercios cerraron, lo que disparó el descontento incluso en sectores que hasta entonces apoyaban al gobierno. En este marco, por último, apenas se ha analizado el papel y la posición de la Iglesia católica en la defensa humanitaria de las comunidades indígenas y de los jóvenes, a pesar de la presión gubernamental.

Es posible que, aunque el gobierno y las organizaciones sociales no hubiesen cometido los errores citados, el conflicto hubiera emergido igualmente, dada la fragilidad de la paz social y de las tensiones latentes desde hace décadas. En este punto hay que acudir al enfoque de estructura, puesto que esta *pax social* ha estado funcionalmente vinculada al sistema económico ecuatoriano y a su inserción en el orden internacional. A continuación, por tanto, se considera el conflicto subyacente a la “Batalla de Quito” que tantas aspiraciones y planes disolvió.

### **Cuando la estructura no es visible**

La “Batalla de Quito” es un conflicto ligado a una configuración socioeconómica específica y a la inserción ecuatoriana en el orden internacional. Al analizar el conflicto desde la EPG no cabe disociar ambos elementos. Por ello, aunque es posible acudir a análisis bien socioeconómicos, bien

internacionales, es indispensable presentar una explicación interconectada. En este sentido, cabe plantear un enfoque de estructura que interprete la “Batalla de Quito”.

El conflicto ha evidenciado la inequidad social del país al tiempo que ha hecho emerger las fracturas soterradas en los planos étnico-clasista, identitario, geográfico e intergeneracional. A su vez, estas fracturas han puesto de manifiesto las debilidades del modelo de desarrollo imperante, sustentado por la inserción internacional de Ecuador en el orden neoliberal-conservador dependiente del FMI y de los intereses de Washington. Y es que cualquier alteración en alguno de los factores del modelo —redistribución económica, sistema político e inserción internacional— repercute sobre los demás (Cox, 2000).

En el caso ecuatoriano, la presión de los ajustes sobre su ya de por sí inequitativo modelo de desarrollo ha acabado fracturando a la sociedad y militarizando su política. Esta tendencia no es nueva en la región y pueden rastrearse fenómenos de este tipo desde los años setenta (Rivera Vélez, 2003). A la vez, numerosas investigaciones reflejan que los conflictos son más probables en sociedades desiguales (Pickett y Wilkinson, 2017). En Ecuador, la medida que desencadenó las protestas fue el anuncio del Decreto 883 —el denominado “paquetazo”— destinado a

cumplir los acuerdos con el FMI<sup>3</sup>. La lógica que fundamenta el decreto encaja en un plan de ajuste ortodoxo y tradicional, financiado con más de 10.200 millones de dólares por un conjunto de instituciones multilaterales (FMI, BM, BID y CAF). El ministro de Economía Richard Martínez asumió el cargo el 16 de mayo de 2018 y ya entonces estaba claro que el ajuste tenía que realizarse.

Con esta medida, la gasolina extra se incrementaba de 1,85 dólares por galón (3,8 litros aproximadamente) a 2,30 dólares, mientras que el diésel pasaba de 1,08 dólares por galón a 2,27, un alza de más del 120% (BBC, 2019). Esto afectaba directamente a los transportistas, a la población rural y a los sectores con menores recursos. De hecho, la medida suponía que el 75% más pobre de la población se hacía cargo del 78% del costo de la eliminación del subsidio; en cambio, al 25% más rico le correspondía tan solo el 22% restante (Ospina Peralta, 2019).

Es preciso contextualizar estas cifras en el marco de la evolución económica del país. Según se desprende de diversos estudios, desde 2011 la economía ecuatoriana no presenta indicadores positivos (Rivera Rhon, 2019). A partir de entonces, las industrias han crecido a un ritmo me-

nor al 8% anual y su aporte al PIB, de un 32%, se mantiene en la misma cifra de 2007 (antes del *boom*). Por su parte, la agricultura aporta cada vez menos a la economía, particularmente desde 2016. Además, el 40% de las exportaciones siguen siendo de petróleo y la inversión extranjera directa (IED), aunque aumentó en 2018, registró en marzo de 2019 la cifra más baja desde 2013. Asimismo, la balanza comercial es negativa desde 2018 y el empleo, si bien aumentó en 2017 y 2018, lo hizo de forma poco significativa y se redujo en junio de 2019. En esta dimensión, las tasas de desempleo y subempleo de los jóvenes menores de 30 años —un 60% de la población que vive mayoritariamente en ciudades— triplica a las de la población adulta y, según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), seis de cada diez jóvenes empleados lo hacen en trabajos temporales e informales (MIES, 2012).

Tras los datos económicos, las estadísticas sociales presentan números igualmente negativos. La pobreza ha aumentado entre 2017 y 2019 del 21% al 25%, mientras que el índice de Gini ha pasado, entre junio de 2017 y junio de 2019, de 0,462 a 0,478. En relación con la población indígena, un 7% se reconoce como tal (1,4 millones), aunque algunos estudios elevan su porcentaje al 20% de la población total. Casi un 90% de ella se concentra en zonas rurales y ciudades intermedias de tradición

<sup>3</sup> Cabe destacar que el Decreto 883 no incluye la quita de subsidios a los combustibles del poderoso sector camaronero y atunero de la costa (Decreto 619, diciembre 2018).

agropecuaria, dedicadas al mercado interno que sostiene parte del consumo urbano. Así, los precios irrisorios y los bajos ingresos agrícolas han funcionado como una suerte de colchón inflacionario que prolonga la desigualdad y mantiene la auto-explotación y la precarización de las comunidades étnicas que “subsidian” al resto del país. De hecho, la extrema pobreza, de un 16,8% en el área urbana, llega al 43,8% en el área rural, mayoritariamente indígena<sup>4</sup>.

Por lo demás, el país sufre una histórica división geográfica. En Guayaquil (costeños) se concentra el poder económico y financiero, mientras que en Quito (serranos) radica la base del poder político y burocrático. Tradicionalmente, la relación entre ambos polos ha sido tirante y competitiva, si bien el foco del conflicto ha estado centrado en Quito, a donde se calcula que llegaron cerca de 15.000 indígenas (mujeres, hombres, mayores, adultos y niños) que fueron albergados en lugares como la Casa de la Cultura, la Universidad Salesiana, la Universidad Católica y otros centros vinculados a la Iglesia católica y a las ONG.

### Conclusiones

Los acuerdos entre el FMI y el gobierno descansan en definiciones económicas neoliberales enfocadas

en las finanzas del Estado y la liberalización del mercado, en gran parte ya superadas incluso por la economía ortodoxa. Hay una larga tradición de investigaciones académicas sobre el efecto negativo de este tipo de ajustes e incluso algunos trabajos recientes señalan su impacto en la agudización de la inequidad (Foster *et al.*, 2019). En el caso ecuatoriano se parte del hecho de que cuenta con un marco normativo que restringe las fuentes de financiación externa y un déficit fiscal del que no se puede salir debido a varios factores: 40 años de subsidios a los combustibles, altos salarios en el sector público con baja productividad, impuestos distorsionados, corrupción, etc.

No obstante, según Mark Weisbrot, codirector del Center for Economic and Policy Research, la estrategia del organismo internacional “equivale en la práctica a mantener el desempleo alto y reducir los salarios para que la economía se haga más competitiva a nivel internacional” (BBC, 2019). En consecuencia, la solución de eliminar los subsidios al combustible, recortar los salarios, reducir el empleo público, eliminar las tarifas a la importación de celulares y bajar los impuestos para atraer inversiones, en lugar de estabilizar la situación, puede agudizar la miseria.

Del análisis se desprende que los distintos actores gestionaron mal la “Batalla de Quito”: no solo el gobierno, sino también la CONAIE, la

<sup>4</sup> Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Disponible en: <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/>.

cual se desmarcó de las protestas del correísmo —cuyo protagonismo, a su vez, resultó amplificado—. En todo caso, la diferencia es que esta vez las protestas no fueron solo de las comunidades indígenas, sino que se sumaron otras fuerzas sociales, sobre todo los jóvenes.

Sin embargo, la “Batalla de Quito” no representa más que parte de una pugna entre distintos modelos de desarrollo que giran en torno a estructuras heredadas de inequidad, racismo, exclusión y discriminación que han venido operando en la configuración económico-política del país y en los equilibrios de su inserción regional e internacional. En tal sentido, es otra batalla regional por el desarrollo.

Las alteraciones que está experimentado el orden interno tienen consecuencias en esta pugna, pero lo cierto es que el modelo de ajuste neoliberal parece que solo puede aumentar la conflictividad social. No obstante, también es correcto afirmar que el modelo del neodesarrollismo progresista de base extractivista no logró consumir el anhelado cambio estructural. Tras el fracaso de estos modelos, la “Batalla de Quito” plantea en Ecuador la amenaza —que ya padecen otros países de la región y del mundo— sobre el porvenir de la democracia y la viabilidad de avanzar hacia un desarrollo más justo.

*Ernesto Vivares es doctor por la Universidad de Sheffield y Máster en International Political Economy por la Universidad de Birmingham. Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza (Argentina). Sus áreas de investigación son la economía política internacional, la financiación del desarrollo y el regionalismo latinoamericano. Es investigador de Estudios Internacionales en FLACSO Ecuador.*

### Referencias bibliográficas

- BBC (2019): “Crisis en Ecuador: 4 razones que explican la crisis que llevó a Lenín Moreno a decretar el ‘paquetazo’ que desató las protestas” (9/10/2019). Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-49978717> (consultado el 18 de octubre de 2019).
- BERRY, C. (2020): “The Sick Man of IPE: the British School”, en E. Vivares (ed.): *Routledge Handbook of Global Political Economy*, Londres, Routledge, capítulo 4.
- COHEN, B. (2019): *Advanced Introduction to the International Political Economy*, Cheltenham, Edward Edgar.
- COX, R. (2000): “Political Economy and World Order: Problems of Power, Knowledge”, en: Stubbs, R. y Underhill, G. (eds.): *Political Economy and the Changing World Order*, Nueva York, Oxford University Press.
- EL COMERCIO (2019): “La inteligencia falló, debió entregar alarmas más claras” (18/10/2019). Disponible en: <https://www.elcomercio.com/actualidad/ministra-romo-inteligencia-fallo-protestas.html>.
- EL PAÍS (2019): “Ecuador pacta un rescate financiero con el FMI a cambio de más reformas estructurales” (21/02/2019) (consultado el 24 de octubre de 2019).
- EL UNIVERSO (2019): “Lenín Moreno traslada a Guayaquil la sede del Gobierno de Ecuador y culpa a Rafael Correa de intento de golpe de Estado” (7/10/2019). Disponible en: <https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/07/nota/7551746/presidente-lenin-moreno-dice-que-rafael-correa-esta-tras-intento> (consultado el 20 de octubre de 2019).
- FMI (2019): “Ecuador: Staff Report for the 2019 Article IV Consultation and Request for an Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Ecuador”, *Country Report* n° 19/79 (marzo). Disponible en: <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/03/20/Ecuador-Staff-Report-for-the-2019-Article-IV-Consultation-and-Request-for-an-Extended-46682>.
- FOSTER, T., KENTIKELINIS, A. E., REINSBER, B., STUBBS, T.H. y KING, L. P. (2019): “How

- Structural Adjustment Programs Affect Inequality: A Disaggregated Analysis of IMF Conditionality, 1980-2014”, *Social Science Research*. Disponible en: [doi.org/10.1016/j.ssresearch.2019.01.001](https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2019.01.001).
- GILPIN, R. (1987): *The Political Economy of International Relations*, Princeton, Princeton University Press.
- MIES (2012): *Jóvenes Ecuatorianos en Cifras*, Gobierno de Ecuador. Disponible en: <http://openbiblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/54762.pdf>.
- OSPINA PERALTA, P. (2019): “Ecuador contra Lenín Moreno”, *Nueva Sociedad* (12 de octubre).
- PICKETT, K. y WILKINSON, R. (2017): “The True and False Cost of Inequality, Social Europe”. Disponible en: <https://www.socialeurope.eu/the-costs-of-inequality>.
- RAVENHILL, J. (2017): *Global Political Economy*, Nueva York, Oxford University Press.
- RIVERA RHON, R. (2019): *Cifras de la gestión Moreno*, texto inédito.
- RIVERA VÉLEZ F. (1994): *Indios, imaginario nacional y política en el Ecuador*, Tesis Maestría, FLACSO México.
- (2003): “Democracia minimalista y ‘fantasmas’ castrenses en el Ecuador contemporáneo, FLACSO Ecuador. Disponible: <http://www.flacso.org.ec/docs/ffaaydec.pdf>.
- STRANGE, S. (1976): “The Study of International Relations”, *International Affairs*, vol. 52.

**Fundación Carolina, noviembre 2019**

Fundación Carolina  
C/ Serrano Galvache, 26.  
Torre Sur, 3ª planta  
28071 Madrid - España  
[www.fundacioncarolina.es](http://www.fundacioncarolina.es)  
@Red\_Carolina

ISSN: 2695-4362  
[https://doi.org/10.33960/AC\\_27.2019](https://doi.org/10.33960/AC_27.2019)

La Fundación Carolina no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los textos firmados por los autores y autoras que publica.



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)